La defensa de los derechos humanos de las personas migrantes.

Un análisis desde el activismo jurídico en la frontera sur de México

Eduardo Elías Gutiérrez López
Universidad Autónoma de Baja California
elias.gutierrez@uabc.edu.mx

INTRODUCCIÓN

La frontera sur mexicana es la puerta de ingreso de personas migrantes de diferentes nacionalidades a territorio mexicano, no sólo por la vecindad con Guatemala, sino también porque es un espacio geográficamente obligatorio para quienes pretenden llegar a Estados Unidos vía terrestre y carecen de documentación migratoria. Por consiguiente, representa también un espacio de tránsito y estancia temporal, un lugar de habituales revisiones migratorias y donde muchas organizaciones de la sociedad civil han surgido con el propósito de atender las necesidades de estas personas migrantes y nivelar el ambiente de peligros y riesgos que experimentan.

De acuerdo a datos de la Organización Internacional de las Migraciones (2018: 31-47; 106-107; 115-118) existen más de veinte albergues para personas migrantes en las entidades federativas de la frontera sur mexicana –Chiapas, Tabasco y Veracruz–. La atención que se brinda puede ir desde alimentación, hospedaje y atención médica, hasta orientación jurídica y acompañamiento en diversos procedimientos (Organización Internacional de las Migraciones, 2018: 4). En los albergues que proporcionan orientación jurídica y acompañamiento legal se brinda una plática informativa al ingreso para identificar a potenciales solicitantes de la condición de refugiado, o bien a víctimas o testigos de delitos en territorio mexicano que puedan tramitar una tarjeta de visitante por razones humanitarias.

Las organizaciones civiles desarrollan un activismo jurídico que se materializa en una constante promoción de acciones legales. La incidencia que tienen en estas ciudades respecto a la regulación y gestión del fenómeno migratorio es mayúscula, pues a través de este activismo jurídico se han gestado muchos cambios en la operatividad política respecto al disfrute y goce de algunos derechos humanos de las personas migrantes.

Las organizaciones que han sido analizadas para los efectos de esta investigación son *La 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes* localizada en el municipio de Tenosique en Tabasco y la *Casa del Migrante Albergue Belén* en Tapachula, Chiapas. Ambas organizaciones se ubican cerca de la frontera sur mexicana, y brindan a la comunidad migrante, orientación y acompañamiento jurídico en diferentes instancias administrativas y judiciales, además de asistencia básica como alimentos, vestimenta, hospedaje, etcétera.

En este trabajo se analizan en primer término los tipos de acciones legales que estas organizaciones civiles están activando a través de diferentes mecanismos y los efectos que producen en la política y tratamiento del fenómeno migratorio en el sur de México. En un segundo momento se explicará que muchas de estas acciones legales o de asistencia les corresponderían realizarlas al Estado mexicano por obligación constitucional. Finalmente, se presentará la percepción de las personas migrantes centroamericanas respecto al rol que simbolizan estas organizaciones civiles en la frontera sur de México, a efecto de subrayar el contrapeso constante que constituyen en un espacio lleno de riesgos y peligros, y que sin su aportación como actores jurídicos, el escenario de estas personas migrantes sería más complejo.

Un propósito adicional de este trabajo es aportar a la discusión teórica de los estudios que abordan las relaciones entre los movimientos sociales y los derechos humanos. En ese sentido, se explica en qué consisten los principales ejes que articulan el activismo jurídico llevado a cabo por las organizaciones civiles defensoras de personas migrantes en el sur de México.

Las acciones legales: solicitud de la condición de refugiado y trámite de la tarjeta de visitante por razones humanitarias

Las categorías migratorias que dispone la *Ley de Migración* mexicana para la regularización de personas extranjeras se obtienen a través de condiciones que son difíciles de materializar en el contexto de quienes ingresan sin documentación migratoria. Por ejemplo, contar con una oferta de empleo, tramitar alguna adopción, estudiar en México, tener hijos de nacionalidad mexicana, ser ascendiente o descendiente en línea recta hasta el segundo grado de un mexicano por nacimiento, entre otros (*Ley de Migración*, 2011: 18-20). A los migrantes

que ingresan de forma indocumentada y no reúnen ninguna de las condiciones anteriores, sólo les restan dos acciones legales por intentar: la solicitud de la condición de refugiado y la tramitación de una tarjeta de visitante por razones humanitarias.

La solicitud de la condición de refugiado es una protección internacional que ratifica el sistema jurídico mexicano a través de la *Ley sobre Refugiados, Asilo Político y Protección Complementaria* (2011: 4) y que se otorga a las personas extranjeras bajo tres supuestos:

1. Temores de persecuciones por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas en el país de su nacionalidad y que debido a ellos, no pueda o no quiera recibir protección de tal país o regresar a él.
2. Huir del país de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
3. Debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades realizadas durante su estancia en territorio nacional, que propicien cualquiera de los dos primeros supuestos.

La tarjeta de visitante por razones humanitarias es una categoría migratoria que prevé la *Ley de Migración* en la fracción V del artículo 52 y que se autoriza a las personas extranjeras que han sido víctimas o testigos de delitos cometidos en territorio nacional, a las niñas, niños y adolescentes no acompañados y a los solicitantes de asilo político, de la condición de refugiado o de protección complementaria (*Ley de Migración*, 2011: 18).

Las organizaciones civiles de la frontera sur de México han identificado estas acciones legales y han establecido procedimientos internos para la detección de personas migrantes que sus experiencias y situación puedan adecuarse a ambas figuras legales. Todo comienza con una charla inicial en las que se les explica su calidad de sujetos de derechos humanos en territorio mexicano y las posibilidades que tienen para regularizar su situación migratoria.

Las personas migrantes que se encuentren en algunos de los supuestos explicados, sostienen una plática más detallada con los abogados de los albergues. La charla además de enfatizar en los pasos que se seguirán en ambos procesos y las instituciones ante las que se comparecerá, deja en claro el acompañamiento que tendrán del personal del área legal de los albergues. El acompañamiento es la fuente principal de persuasión para incoar estos proce-

dimientos, pues de lo contrario, las personas migrantes no acudirían a las instituciones mexicanas o activarían los mecanismos jurídicos conducentes, ante el temor y la desconfianza respecto al actuar de las instituciones del Estado mexicano (Gutiérrez, 2019: 118).

La condición de refugiado

El proceso para obtener la condición de refugiado inicia con la presentación de un escrito ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) con la exposición de las razones que fundamenten dicha solicitud (*Ley sobre Refugiados, Asilo Político y Protección Complementaria*, 2011: 7). Después de la presentación del escrito y la expedición de la constancia de trámite de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, prosigue una entrevista en la que se interroga a las personas sobre las bases fácticas o documentales en que sustenta su versión.

Aunque la duración de los procedimientos de refugio en México es variable en función de distintos factores, por ejemplo, si el solicitante es niña, niño o adolescente no acompañado, si hay oficinas de la Comar en la ciudad donde se ventile el trámite,¹ entre otros, lo cierto es que se estiman aproximadamente entre nueve y doce meses de espera para la resolución (Gutiérrez, 2019: 128). Esta acción legal es la más común entre las personas migrantes, al grado incluso de sobrecargar a los órganos delegados para la tramitación de estos procedimientos en ambas ciudades. Hay que subrayar que en caso de admitirse la condición de refugiado, la consecuencia legal es la residencia permanente.

La tarjeta de visitante por razones humanitarias

A las personas que manifiesten haber sido víctimas o testigos de algún delito en territorio mexicano se les conmina a comenzar el proceso para la obtención de la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Este trámite, a diferencia de la condición de refugiado, requiere de dos procesos distintos ante dos instituciones de diversa naturaleza para ser completado.

En primer término ante las Fiscalías para la Atención a Migrantes, a efecto de presentar la denuncia de hechos acerca del delito del que fueron víctimas o testigos en territorio mexicano. Una vez que se presente la denuncia, la Fiscalía debe entregar a la persona migrante una constancia donde se les otorgue el reconocimiento como víctimas. En segundo término, acudir a las oficinas

¹ La Comar únicamente tiene presencia con oficinas en cuatro lugares del país: Tapachula (Chiapas), Tenosique (Tabasco), Acayucan (Veracruz) y Ciudad de México (Paris, 2019: 5).

del Instituto Nacional de Migración con la constancia de reconocimiento como víctima para solicitar la tarjeta de visitante por razones humanitarias.

De acuerdo al inciso a de la fracción V del artículo 52 de la *Ley de Migración* (2011: 18), sólo se les expedirá esta tarjeta de visitante por razones humanitarias a las víctimas o testigos de delitos en territorio nacional hasta entonces concluya el proceso penal, momento en el que deberán abandonar México o solicitar otra condición migratoria. Aunque es menor el número de personas que solicitan esta vía en comparación con las solicitudes de la condición de refugiado, se ha convertido en otra posibilidad que tienen las organizaciones civiles del sur de México para brindar protección a las personas.

¿Y el Estado Mexicano?

A partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 que modificó varias disposiciones legales, entre ellas el artículo primero de la Constitución Mexicana, se determinó que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias se encuentran obligadas no sólo a proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, sino también a promoverlos (*Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, 2011: 1). La promoción de los derechos de acuerdo a Serrano (2013: 119-120) estriba no solamente en que las personas conozcan los derechos y mecanismos de defensa, sino también en que se mejore la satisfacción de los derechos por parte de los sujetos titulares y empoderarles con relación a sus prerrogativas.

De tal manera que la obligación de promover los derechos humanos por parte del Estado mexicano no se constriñe exclusivamente a difundir información, pues va acompañada de una serie de acciones que permitan asegurar que tanto las estrategias de promoción han mejorado la situación de los derechos humanos que se intenta difundir. Esta obligación debe ser más enfática al tratarse de grupos o personas en alguna situación de vulnerabilidad, ya sea porque no tienen manera de acceder a dicha información, o porque son quienes más experimentan transgresiones a sus derechos humanos.

Las personas migrantes en tránsito por México reúnen ambas condiciones. Por un lado, provenir de un país donde quizá no se cuenta con los mismos mecanismos legales o derechos reconocidos, aunado a las experiencias que han tenido con sus instituciones; determinan su posición de desconocimiento o desinformación sobre los derechos humanos de que son titulares en territorio mexicano. Por otro lado, la ausencia de documentos migratorios y la búsqueda de rutas alternas y alejadas de las revisiones de las autoridades mexicanas, les coloca en situación de vulnerabilidad, no sólo frente a las instituciones del Estado Mexicano, sino incluso con otros actores como la delincuencia organizada

(Guevara, 2014: 107).

No obstante estas obligaciones, el Estado mexicano no realiza labores de difusión o estrategias para empoderar a las personas migrantes en materia de derechos humanos, a pesar de que el artículo primero de la Constitución Mexicana hace extensivas estas prerrogativas a todas las personas sin importar su condición migratoria (*Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, 2011: 1). Al parecer la racionalidad de la política migratoria mexicana es que la promoción deber ser sólo para quienes deciden activar los mecanismos legales, quienes en el caso de la frontera sur mexicana, ya se encuentran asesorados y acompañados por las organizaciones civiles, por lo que no necesariamente son los que más la necesitan.

Ante la omisión del Estado mexicano de cumplir con estas obligaciones constitucionales, se abre la pauta para el surgimiento de otros actores en la frontera sur del país, como lo son las organizaciones civiles y los organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur). Aunque el rol de estos actores es fundamental, en términos de una gobernanza de las migraciones que prevé que la función del Estado en un fenómeno complejo como la migración es fundamental pero insuficiente, pues se requiere de la colaboración de otros actores privados y sociales (Ramos, 2016: 67), lo cierto es que en este caso lo que persiste es una sustitución de acciones por parte de estos actores respecto de lo que le correspondería legalmente realizar al Estado mexicano.

Particularmente las organizaciones civiles en la frontera sur de México son las que ejecutan de modo constante labores de promoción de derechos humanos en sus espacios de acción, al tiempo que empoderan a las personas migrantes para que regularicen su situación de estancia, denuncien los actos delictivos de que fueron víctimas o testigos y obtengan un documento que les permita protegerse de eventuales violaciones a sus prerrogativas. En otras palabras, cumplen con las dos dimensiones que componen la obligación de promover contenida en la Constitución Mexicana, sin embargo, ello lo tendría que ejecutar el Estado.

Los únicos acompañantes durante los procesos de solicitud de la condición de refugiado o de la tarjeta de visitante por razones humanitarias en la frontera sur mexicana son las organizaciones civiles, los organismos internacionales o ambos en tareas colaborativas. No hay ningún acompañamiento de parte de alguna defensoría legal del Estado mexicano o de cualquier otra institución haciendo labores de esta índole, incluso en la mayor parte de los casos tampoco existe apoyo consular de los Estados de origen de quienes tramitan estas acciones legales.

Percepción de las personas migrantes centroamericanas sobre el rol simbólico y operativo que representan las organizaciones civiles del sur de México

Por lo general, para las personas migrantes de Centroamérica su primer contacto con los derechos humanos desde una fórmula instructiva o de difusión, se da en territorio mexicano en las organizaciones de la frontera sur. Sus narrativas hacen notorio que los Estados de origen no efectúan una labor de promoción que les permita identificar más allá de nociones vagas, con qué derechos humanos cuentan por el sólo hecho de ser personas.

Esta desinformación es un primer obstáculo para la cultura de la exigencia de los derechos humanos en México. El desconocimiento del contexto jurídico mexicano no es propiamente lo que limita la exigencia de cumplimiento a sus prerrogativas por parte del Estado (de origen, de tránsito o de destino), sino la ausencia de un autorreconocimiento *per se* como sujeto de derechos humanos, que tiene su génesis en la desinformación.

Una de las formas por las que las normas jurídicas tienen un encause en la comunidad es a través del conocimiento que, a la postre, constituye una cultura de la legalidad. García Ramírez (2014: 6) señala que los órdenes jurídicos interno e internacionales en lo que respecta a los derechos humanos se conectan por medio de puentes: el constitucional, el legal, el político, el jurisdiccional y el cultural. El puente cultural es el que responde al modo en cómo la sociedades reciben, asimilan y se apropian de los derechos humanos a través de la información y el conocimiento.

Ante la desinformación generalizada que caracteriza a las personas migrantes que ingresan a México de forma indocumentada y que en su tránsito llegan a las organizaciones civiles de esta zona, estas últimas han condicionado un modelo operativo basado en el empoderamiento migrante, a través de la transmisión de conocimiento de derechos humanos y el acompañamiento personalizado durante los trámites y gestiones que se requieren al accionar alguna prerrogativa.

El modelo operativo de las organizaciones civiles consiste en concentrarse en las posibilidades que tienen las personas migrantes que llegan al sur de México de regularizar su situación migratoria. Por eso es que después del registro de quienes ingresan, prosigue la charla informativa y la insistencia en identificar a personas con altas posibilidades de ser solicitantes de la condición de refugiado o de la tarjeta de visitantes por razones humanitarias.

La operatividad de estos albergues estriba en considerar a las experiencias negativas de estas personas en sus lugares de origen o en territorio mexicano como cartas de acceso o posibilidades institucionales para obtener un documento migratorio (Gutiérrez, 2019: 97). Una tarjeta de visitante por razo-

nes humanitarias disminuye los riesgos y peligros y produce que las personas migrantes sientan más confianza para acudir ante una autoridad o institución mexicana.

Estas acciones por parte de las organizaciones civiles del sur de México representan un contrapeso ante las vicisitudes que componen la llegada, tránsito y estancia de las personas migrantes, sin embargo, son además un recordatorio al Estado mexicano de sus omisiones constitucionales y una exigencia forzosa de su trabajo. Esta labor de difusión y acompañamiento es una de las principales razones por las que la Comar y las Fiscalías para la Atención a Migrantes han rebasado sus límites operativos y su personal resulta insuficiente para la carga laboral que se les exige con tantas solicitudes y denuncias.

Por lo tanto, el desconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes en México no es consecuencia únicamente del desinterés de los Estados de origen, sino también del Estado mexicano, al eludir las responsabilidades de promoción y dejar en manos de las organizaciones civiles estas tareas. El éxito de la operatividad de estos dos albergues se ha generado por el acompañamiento y no solamente por la difusión, así es como se ha constituido este contrapeso que responde a una ineficacia estatal.

Otro aspecto a destacar en la operatividad de las organizaciones civiles del sur de México es que algunas de las mejoras respecto de las condiciones de diversos derechos humanos de las personas migrantes en estos contextos geográficos, ha sido a través de su pugna y movilización y no a un cumplimiento genuino del Estado mexicano (Gutiérrez, 2019: 125).

La contienda que enfrentan estas organizaciones civiles es de naturaleza política, pero en este caso se juega en los terrenos de lo jurídico, toda vez que han encontrado en las acciones legales una manera de evidenciar las ineficacias estatales y contrarrestar las múltiples transgresiones a derechos humanos,

Dentro de los ejes que articulan el activismo jurídico de estas organizaciones se encuentran la asistencia de necesidades elementales a personas migrantes que ingresan a territorio mexicano, seguido de estrategias de difusión de información útil en materia de derechos humanos y de estrategias de regularización migratoria en México, para finalizar con una labor de acompañamiento durante los trámites o procesos que las personas migrantes requieren llevar a cabo. Este repertorio permite además evidenciar las omisiones del Estado mexicano en el área de promoción de derechos humanos, las carencias presupuestales en las instituciones encargadas de las cuestiones migratorias y ser el contrapeso constante ante los múltiples riesgos y vicisitudes que componen el trayecto de una persona migrante en la frontera sur del país.

Es por ello que en este trabajo se intentan describir los componentes que

conforman el activismo jurídico de las organizaciones civiles del sur de México en materia de defensa de derechos humanos de personas migrantes. Este activismo jurídico es aquel desarrollado por las organizaciones de la sociedad civil, que consiste en el empoderamiento de las personas migrantes a través de la transmisión de conocimiento útil de derechos humanos, datos para una regularización migratoria y acompañamiento constante durante la secuela de todos los procesos y comparencias que se necesiten.

El activismo jurídico nace de la relación inexorable entre los movimientos sociales y los derechos humanos. Este nexo tiene su basamento en la comprensión de los derechos humanos como procesos de lucha y negociación entre gobernantes y gobernados (Stammers, 2009; Tilly, 2004 en López, 2017: 60). En otras palabras, en aquella perspectiva teórica de los derechos humanos que Arias (2015: 14-16) denominó disidente o de protesta, y que les ve como resultados de luchas y movimientos sociales y no como valores inherentes a una aparente naturaleza humana, que es la visión hegemónica dentro de los estudios jurídicos. Es en el marco de esa relación que surgen las organizaciones civiles del sur de México como actores jurídicos en defensa de los derechos humanos de personas migrantes.

No obstante, existen tres consecuencias cuestionables bajo este modelo operativo de las organizaciones civiles de la frontera sur mexicana como actores jurídicos. Por un lado, la carga simbólica que se les enseña a las personas migrantes en los albergues acerca de la documentación migratoria en México. El simbolismo del documento migratorio no únicamente como un instrumento para evitar deportaciones o detenciones arbitrarias, sino incluso para ser desde un punto de vista pragmático, sujeto de derechos humanos en este país (Gutiérrez, 2019: 133). Este discurso se adhiere al cúmulo de experiencias negativas que las personas migrantes han vivido en sus lugares de origen con relación a los derechos humanos, y perpetúa un mensaje de que para ser sujeto de derechos humanos se debe contar con alguna tarjeta migratoria.

La segunda consecuencia está concatenada, pues en la medida en que las personas migrantes estimen el número de “ventajas” o “mejorías” que pueden resultar de contar con una tarjeta de visitante por razones humanitarias, sus deseos por adquirirla aumentarán. En ocasiones se trata de personas que aunque devienen de un escenario hostil en sus lugares de procedencia, no alcanzan a adecuarse a los supuestos normativos en México para ser solicitante de la condición de refugiado y tampoco han sufrido ni presenciado un delito en territorio mexicano. Sin embargo, el deseo instintivo de protección les puede llevar a crear o tergiversar historias, con la pretensión de alcanzar la obtención de dichos documentos migratorios y por ende la protección legal.

Finalmente, la tercera consecuencia estriba en que es probable que las personas migrantes activen los mecanismos legales no porque tengan el objetivo principal de condenar las conductas de los representantes del Estado mexicano o de buscar sanción, justicia y reparación, sino por el resultado que se consigue con la presentación de la denuncia de hechos o de la solicitud de la condición de refugiado. En otras palabras, se construye una visión utilitaria de las violaciones a derechos humanos como cartas de acceso para adquirir beneficios administrativos o instrumentales, es decir, una noción de víctima como algo hasta cierto punto positivo, que se traduce en ventajas pragmáticas o instrumentales, como en este caso contar con una tarjeta de visitantes por razones humanitarias.

CONSIDERACIONES FINALES

Las organizaciones de la sociedad civil que protegen los derechos humanos de las personas migrantes en la frontera sur mexicana constituyen una forma de activismo jurídico, pues a través de diversas acciones legales que materializan con sus propios recursos, sustituyen obligaciones que legalmente le corresponderían al Estado mexicano. Así mismo, han encontrado en los mecanismos legales una vía para recordarle su ineffectividad en la protección de los derechos humanos, al tiempo que contrarrestan las condiciones de vulnerabilidad que experimentan las personas migrantes ante una política migratoria de control con rostro humano (Domenech, 2013: 2), es decir, una política que desde la ley emite un discurso de seguridad humana y operativamente actúa bajo un paradigma de seguridad nacional.

Las principales acciones legales que ejecutan estas organizaciones como forma de activismo jurídico, son las solicitudes de la condición de refugiado y los trámites de las tarjetas de visitante por razones humanitarias. Se han establecido procesos internos en los albergues de la frontera sur de México que conforman su repertorio de movilización política y que sirven para identificar a personas migrantes con posibilidades de regularizar su situación de estancia por conducto de estas dos modalidades administrativas. Estos procesos internos representan también otras vías de activismo jurídico que consisten en el empoderamiento de la persona migrante, a través de la promoción de conocimiento sobre derechos humanos y el acompañamiento personalizado durante los procesos que llevan a cabo las personas migrantes.

Estas formas de activismo jurídico han surgido de los agravios y violaciones experimentados por las personas migrantes que transitan por territorio mexicano y como una vía para encausar esas transgresiones en una lucha rei-

vindicatoria por la protección –y no sólo reconocimiento– de sus derechos. Es por ello que las organizaciones civiles de la frontera sur de México se inscriben como actores jurídicos, al tiempo que se convierten en la fuente de capacidad de agencia de las personas migrantes. Pues la capacidad de agencia no siempre emana de forma genuina del sujeto, sino que en ocasiones encuentra otras fuentes, como en este caso la asistencia de otros actores que les empoderan con información y acompañamiento (Gutiérrez, 2019: 111).

El riesgo de mantener esta operatividad en las organizaciones civiles del sur mexicano, centrada en la regularización migratoria, reside en la perpetuación de un discurso que reconoce que para que en México seas sujeto de derechos humanos y tengas protección de las instituciones del Estado, debes contar con una tarjeta de estancia. Por otro lado, se instrumentaliza hasta cierto sentido el hecho de obtener estos documentos y se olvida el propósito de fondo de las acciones legales, pues lo único que es de interés, es el resultado. Finalmente, se puede llegar a idealizar el rol de víctima, ya que éste puede ser el medio para obtener un documento migratorio y en consecuencia, el reconocimiento como sujeto de derechos humanos.

En la medida en que más actores políticos comiencen a jugar dentro de los terrenos jurídicos o judiciales, a través de la presentación de acciones legales y de la presiones mediática y procesal que implica para el Estado mexicano esta clase de movilizaciones, se reforzará la idea conceptual del activismo jurídico. Ha existido históricamente poca creencia en la estrategia de movilización política de jugar bajo las reglas del Estado, y de ese modo los movimientos sociales han encontrado nutrientes para su repertorio, en acciones fuera de lo legal. Empero, actividades como las que ejecutan día a día las organizaciones civiles del sur de México en la defensa de los derechos humanos de personas migrantes, son un ejemplo de la incidencia y repercusión que se puede conseguir por conducto de esta clase de repertorios de acciones colectivas dentro del marco de un activismo jurídico.

BIBLIOGRAFÍA

- Arias Marín, Alán. (2011). Tesis sobre una teoría crítica de los Derechos Humanos. *Open Insight*, vol. VI, N° 9, enero-junio 2015, pp. 11–33.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. (2011). Disponible en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/hm/1.htm> (Consultada el 20 de agosto de 2019).
- Domenech, Eduardo. (2013). Las migraciones son como el agua: Hacia la instauración de políticas de control con rostro humano. La gobernabilidad migratoria en la Argentina. *Polis, Revista Latinoamericana*, 12(35), pp. 119-142.
- Galafassi, Guido. (2011). Teorías diversas en el estudio de los movimientos sociales. Una aproximación a partir del análisis de sus categorías fundamentales. *Cultura y Represen-*

- taciones Sociales, año 6, número 11, pp. 8-32.
- García Ramírez, Sergio. (2014). Recepción nacional del derecho interamericano de los derechos humanos. Implicaciones penales. En García Ramírez, Sergio, Olga González, y Mercedes Peláez (coords.) *Criterios y jurisprudencia interamericana de derechos humanos: influencia y repercusión en la justicia penal*, pp. 3-18. México: Universidad Nacional Autónoma de México: Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
- Guevara Bermúdez, José Antonio. (2014). Conexiones entre los derechos humanos de las personas migrantes y la seguridad ¿es posible afirmar que el derecho mexicano criminaliza la migración indocumentada? *Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho*, núm. 31, julio-diciembre, pp. 81-117.
- Gutiérrez López, Eduardo Elías. (2019). *Análisis sociojurídico de la percepción de migrantes centroamericanos sobre derechos humanos en la frontera sur mexicana*. Tesis de Doctorado en Estudios de Migración. México: El Colegio de la Frontera Norte.
- Ley de Migración. (2011). Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_030719.pdf (Consultada el 19 de agosto de 2019).
- Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. (2011). Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPCAP_301014.pdf (Consultada el 19 de agosto de 2019).
- López, Jairo Antonio. (2017). Movilización y acción colectiva por los derechos humanos en la paradoja de la institucionalización, *Estudios Políticos*, núm. 51, julio-diciembre, 2017, pp. 57-78.
- Organización Internacional de las Migraciones. (2018). *Directorio de casas y albergues para personas migrantes*. México: Organización Internacional de las Migraciones.
- Paris Pombo, María Dolores. (2019). *La crisis del refugio en México*. México: Observatorio de Legislación y Política Migratoria y El Colegio de la Frontera Norte.
- Ramos, José María. (2016). Gobernanza y seguridad: Hacia una redefinición de la política migratoria mexicana, 2012-2014. *Migraciones Internacionales*, vol. 8, núm. 3, enero-junio de 2016, pp. 65-94.
- Serrano García, Sandra. (2013). Obligaciones del Estado frente a los derechos humanos y sus principios rectores: una relación para la interpretación y la aplicación de los derechos humanos. En Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, José Luis Caballero Ochoa, Christian Steiner (coords.). *Derechos humanos en la Constitución. Comentarios de jurisprudencia nacional e interamericana*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Fundación Konrad Adenauer, pp. 91-32.

Fecha de recepción 08 de noviembre de 2019
 Fecha de aceptación 29 de noviembre de 2019